

Nueva guerra al narcotráfico es una falsa respuesta

Camilo González Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz

Entre todos los países del mundo Colombia ocupa el primer lugar en homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo en masacres, después de México que lleva 439 en 2020. En este año, en medio de la pandemia del Covid 19 se han reavivado muchas formas de violencia que han desbordado la capacidad de respuesta del Estado.

Entre enero y septiembre de 2020, se han presentado 221 asesinatos de líderes sociales, 65 masacres con 260 víctimas, entre ellas 6 de esos líderes, el homicidio de 50 excombatientes en proceso de reincorporación y más de 30.000 personas desplazadas por la fuerza. En todos estos campos se presenta un aumento con respecto al lapso comparable en el año anterior, con el agravante que en los últimos meses las tendencias muestran mayores tasas de crecimiento.

El diagnóstico y remedio que ha encontrado el gobierno ante la ola de violencias los resumió el ministro de Defensa y Seguridad Nacional diciendo que el origen de estos males está en el legado del acuerdo de paz firmado en el gobierno pasado que a su juicio permitió el crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el tráfico de cocaína; con ello, según el ministro, se permitió el crecimiento de grupos armados relacionados con el narcotráfico y la multiplicación de nuevos grupos posacuerdos de paz con las FARC EP. (Trujillo, CH. Foro Semana, 2/10/20)

La estrategia de respuesta de la administración de Iván Duque es elevar a primer rango la guerra al narcotráfico destinando los mayores recursos humanos de Fuerza Pública y de las agencias del gobierno a la erradicación forzada y al combate a los grupos armados organizados y delincuenciales sustentados por las rentas del narcotráfico. Incluso la protesta con explosiones sociales, como la ocurrida en Bogotá el 9 de septiembre, es interpretada por el gobierno como penetración del crimen organizado basado en el narcotráfico y el terrorismo. La receta se resume en control militar de territorios y militarización de la seguridad ciudadana, que en medio de la pandemia se inscribe en la imposición de un Estado de Excepción con un régimen de guerra.

Esa relación que hace el gobierno entre supuestas concesiones al narcotráfico en aras de las negociaciones con las FARC EP en La Habana y persistencia de asesinatos y masacres dos años después de gobierno del Centro Democrático encabezado por Iván Duque, y el expresidente Álvaro Uribe como jefe de la coalición de gobierno, es un sofisma de distracción muy efectivo para la

propaganda de corto plazo. Sin embargo, se soporta en una mala lectura de los hechos y dinámicas de las violencias a las cuales pretende responder.

Hay que anotar que la expansión de cultivos de coca y el aumento de la producción de cocaína entre 2014 y 2020 tiene muchas causas asociadas que dependen de la debilidad de políticas desde los gobiernos, de los ciclos de la demanda desde EE. UU. y Europa, precios del oro y del dólar y, sobre todo, por las fallas del Estado en políticas integrales de incorporación de poblaciones y territorios a las economías legales y al pleno funcionamiento del Estado Social de Derecho. Al actual gobierno le cabe la responsabilidad de haber perdido dos años de respuesta efectiva a las urgencias de las regiones con historias de conflictos estructurales por impacto de modelos violentos y armados de acumulación de riqueza y de poderes.

Mientras repite que heredó el problema, la administración Duque hace todo para agravarlo poniendo freno a la reforma rural, ampliación democrática, restitución de tierras; le agrega gasolina al rescoldo, desprestigiando a la justicia transicional y la reincorporación de excombatientes con el estigma de ser impunidad y entrega de espacios políticos a criminales. No es extraño que congele los programas de sustitución concertada de cultivos de coca y le de preminencia a la erradicación forzada que se sabe es costosa y poco efectiva. Al fin de cuentas el objetivo no es que las poblaciones y pequeños productores se transformen en los usufructuarios legales de esos territorios. Vaciar territorios y redefinir la propiedad colectiva y campesina es el sentido real de la estrategia.

Los asesinatos sociopolíticos y las masacres encuentran condiciones propicias por la polarización y el intento del partido de gobierno de desmontar piezas fundamentales de los acuerdos de paz y reinstalar una estrategia de guerra en el país y en territorios en los cuales la población está cada vez más organizada exigiendo respuestas y ejerciendo control territorial frente a las aspiraciones de grupos armados y sus aliados desarmados que se acostumbraron a hacer riqueza en contexto de guerra.

Al sustituir la política constitucional de paz, que incluye la implementación integral de los acuerdos de 2016, por la llamada “Paz con Legalidad”, el gobierno acoge sólo pedazos que incorpora en la implementación del programa del partido de gobierno, que es de seguridad para para copar territorios a costa de las comunidades. A las violencias estructurales que siguen esperando soluciones, a la recomposición de grupos armados para disputar rentas y territorios, el gobierno responde con otras violencias pues el objetivo de la consolidación y la sostenibilidad es transformar esas regiones de viejos conflictos en zonas estratégicas de grandes inversiones, de alta productividad y de capacidad exportadora. Así esta escrito en los documentos de Seguridad y Defensa y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020.

Los asesinatos y masacres son parte de ese panorama de nuevas violencias que azotan directamente a la tercera parte de los municipios de Colombia. No se trata sólo de una disputa por control de territorios en zonas apartadas o en las áreas impactadas por 200.000 hectáreas de coca. Los líderes sociales y la sociedad entera está atrapada en medio de varias pandemias. Las comunidades y colectividades de la sociedad civil se han empoderado desde la firma de los pactos de paz y en medio de la pandemia para ejercer control de sus territorios y rechazar las dictaduras locales de los armados. Las estructuras macrocriminales mafiosas, narcotraficantes y paramilitares, están en desequilibrio en disputas entre sí, con fraccionamientos y reacomodos en sus alianzas internas e internacionales; la disputa por rentas y control los lleva a enfrentar lo poderes de hecho de los sectores más organizados, étnicos, campesinos, comunales, juveniles, de mujeres y de expresiones políticas. Grupos de interés que mantienen poder en los territorios, construido en medio de la guerra, siguen interesados en alianzas con armados y corruptos para formalizar tierras despojadas y valorizar títulos mineros acumulados. Por encima de este escenario de violencias se sitúan poderes económicos e instituciones cooptadas que siguen interesados en recomponer los territorios colectivos, las zonas de reserva forestal, para imponer lo que consideran el verdadero desarrollo basado en megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y forestales.

Esta visión panorámica contradice la idea de que asesinatos y masacres son el simple resultado de la acción de grupos armados organizados y de intereses del narcotráfico. Además de la violencia armada de estos grupos lo que explica la persistencia de crímenes de lesa humanidad es la presencia de fuerzas que ven en la paz, en la implementación de los acuerdos y el fortalecimiento de la democracia y peligro para su modelo de poder y de acumulación de riqueza. Unos cumplen el papel de perpetradores directos de las agresiones y otros el de cómplices beneficiosos de la persistencia de violencias.